

Arica, veintinueve de enero de dos mil veintiuno.

VISTO:

Se reproduce la sentencia apelada, de doce de mayo de dos mil veinte, escrita en el folio 64 de la carpeta electrónica de estos autos.

Y SE TINE ADEMÁS PRESENTE:

PRIMERO: Que, en estos autos, la abogada doña Corali Aravena León, por la demandada, dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia de doce de mayo de dos mil veinte que acogió la demanda de indemnización de perjuicios deducida, sólo en cuanto condenó a su representada, Nelly Ximena Roxana Soto Espinoza S.A. (Colegio San Jorge), al pago de las sumas allí indicadas, por estimar que causa perjuicios irreparables a los derechos de su parte y adolece de errores, además de no haberse ponderado la prueba conforme a derecho.

Sostiene que, yerra el sentenciador al rechazar la objeción de documentos planteada por su parte la que según el fallo en alzada se reduce a una apreciación subjetiva respecto de la forma de los documentos objetados alejándose de las causales de impugnación que las fundamentan, esto es falta de autenticidad y falta de integridad, porque pese a que, en el caso de la deponentes doña Katherine Nova Leila, si bien compareció a reconocer la firma puesta en el informe psicológico acompañado por el actor, no reconoció íntegramente su contenido, alegando también la falta de autenticidad y falta de integridad respecto del Informe académico y social emitido por la profesora de Colegio Junior College doña Graciela Salazar Martínez, quien, según indica, no concurrió a estrados a ratificar el documento que emitió, por lo que las objeciones documentales deducidas por la demandada debieron ser acogidas.

Reclama también que, el sentenciador rechazó las alegaciones de falta de personería del abogado, falta de representación legal de los demandantes y de inadmisibilidad en la forma, en cuanto al régimen de responsabilidad por las cuales se demanda, deducidas todas por su parte en la contestación de la demanda.

En cuanto al rechazo de la excepción de falta de personería del que comparece a nombre de los demandantes y falta de representación legal de los demandantes, indica que yerra el fallo apelado, porque tal como consta de la redacción de la demanda, el letrado Alejandro Ortiz Meier accionó de indemnización de perjuicios por don Eduardo César Góngora González y por doña Carla Andrea Véliz Allende por sí y en representación de sus hijos menores de edad, de 5, 7 y 9 años respectivamente. Sin embargo, de la lectura de la escritura pública del Mandato Judicial otorgada ante Notario Público con mucha anterioridad a los acontecimientos que fundan la demanda y cuya vigencia no aparece



acreditada en autos, consta que fue conferido sólo por los referidos padres por sí al letrado que la dedujo, sin que éstos lo hubieren otorgado por sus hijos menores de edad y para actuar por ellos, por lo que, según señala, procedía rechazar la demanda respecto de esos menores ya que el abogado carecía de personería para comparecer y demandar a su nombre, razón por la que al ser acogida por el Juez se transgredieron las reglas sobre comparecencia en juicio y, al enmarcarse dicha infracción dentro de normas de carácter indisponibles, atendida la naturaleza pública de la relación procesal y las normas que conforman su estatuto, tratándose el denunciado de un defecto insubsanable, no está permitida su ratificación posterior ni su saneamiento.

Alega también y en ese mismo capítulo de la demanda, la transgresión del artículo 6° del Código de Procedimiento Civil que exige exhibir el título que acredite la representación porque, según afirma, exhibirlo es mostrar físicamente el documento del que emana la personería o la representación que es algo material, lo que no ocurrió en este caso, pues sólo se acompañó por el letrado el mandato judicial otorgado por Eduardo Góngora González y Carla Andrea Veliz Allende, actuando por sí. Faltando la representación legal de quien compareció por los tres actores menores de edad, toda vez que, según se consigna en el libelo pretensor, sus padres accionaron indicando que lo hacen por sí y en representación de sus hijos menores de edad, pero sin acreditar la representación legal de estos, razón por la que no pudiendo accionar válidamente, la relación procesal trabada entre los litigantes se encontraba viciada y en consecuencia la sentencia dictada no pudo producir los efectos que le son propios entre las partes. Agregando que, la circunstancia de ser Eduardo Góngora González y Carla Veliz Allende, padres de los menores demandantes no necesariamente importa que sean sus representantes legales y que detenten su cuidado personal uno de ellos o ambos de manera conjunta, como lo prescribe el artículo 264 del Código Civil y, dado que estas circunstancias no fueron acreditadas en autos, no pueden interponer demanda en sus nombres y representación, debiendo entonces la impetrada por los menores ser rechazada por el tribunal de Alzada.

Seguidamente sostiene que, el demandante confundió el derecho en que fundamenta su acción, al no precisar el ámbito de responsabilidad que le atañe a la demandada, no pudiendo el Juez tenerlo por establecido desde que el actor dedujo una demanda de indemnización de perjuicios aludiendo a las normas de responsabilidad contractual pues, en este caso, se trataría de una responsabilidad civil derivada de un contrato de servicios educacionales al que se le habría puesto término en forma unilateral por la demandada, aludiendo el demandante al derecho de prenda general de los acreedores y la posibilidad de impetrar la



ejecución forzada de una obligación, refiriéndose al artículo 2465 del Código Civil y, terminando la fundamentación legal de su demanda, citando el artículo 2329 de esa misma preceptiva, una de las normas del régimen de responsabilidad extracontractual, confundiendo a su entender el estatuto de la responsabilidad Civil al mezclar la responsabilidad extracontractual o Aquiliana y la responsabilidad contractual. Sin embargo, sostiene, al resolver el Juez la cuestión controvertida en autos, a la luz del ámbito de la responsabilidad contractual y extracontractual o, exclusivamente en base a alguno de estos estatutos, vulneraría la garantía constitucional del debido proceso del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política del Estado, al dictar una sentencia con infracción a las leyes de procedimiento e incurriría en el vicio de ultra petita, conforme el artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil, pues excedería en su pronunciamiento lo que le fue pedido, citando al efecto el apelante doctrina de los profesores don Mario Casarino Viterbo y don Darío Benavente.

Agrega luego que, el Juez tampoco pudo hacer aplicable un régimen subsidiario de responsabilidad ajeno al vínculo regulado *contractualmente por las partes, como es el régimen de responsabilidad extracontractual* o contractual, por el problema del cúmulo de responsabilidades ya que la demanda de autos debe estar sujeta a uno u otro régimen de responsabilidad civil y no a ambos, razón por la que su construcción es defectuosa, siendo entonces el cumulo u opción de responsabilidades inadmisibles, desde que no le es permitido al contratante salirse de la esfera del contrato y demandar en sede extracontractual o viceversa, esto es, si el daño que proviene de una infracción da al acreedor el derecho de elegir entre ambas responsabilidades y demandar indemnizaciones de acuerdo con la que más le convenga, como en el caso sub-lite en que la actora pretende elegir a su comodidad la esfera jurídica en la cual accionar, lo que según expresa citando al efecto doctrina del profesor Arturo Alessandri Rodríguez y jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, no resulta posible. Concretamente el acreedor cuyo deudor viola su obligación no podrá demandar perjuicios por esta obligación con arreglo a los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.

Alega además la ausencia de requisitos para establecer la responsabilidad indemnizatoria de la demandada. Sostiene la falta de culpa de la demandada ya que fue la actora quien matriculó a sus hijos en otro colegio; falta de Lesión o daño que no existe y, si lo hubiere, no resulta atribuible al actuar de su representada, porque si bien el Colegio San Jorge efectivamente tomó la decisión de no renovar la matrícula de los hijos de los actores frente a su disposición negativa y falta de compromiso para superar los problemas conductuales del menor Maximiliano Andrés Góngora Véliz y, pese a reconsiderarse por su parte la



decisión de no renovar la matrícula, como quedó de manifiesto al evacuar el informe requerido por esta Corte con fecha 11/01/2017 y antes que se dictara sentencia en los autos sobre recurso de Protección Rol N° 797-2016 y se ordenara dejar sin efecto su decisión, los actores no cumplieron con el proceso de matrícula previo, lo que, señala, da cuenta de su pertinaz y resistente conducta para involucrase en el proceso de mejorar la conducta de su hijo, concurriendo con su actuar a la producción del daños a sus hijos al matricularlos en un colegio distinto. Agrega que tampoco consta a su parte que efectivamente el menor Maximiliano Andrés Góngora hubiere desarrollado patologías a consecuencia del video que vio junto al resto de sus compañeros de curso y que su conducta en el actual establecimiento educacional al que asiste no esté exenta de los mismos reparos.

Dice que, para configurar la responsabilidad indemnizatoria tampoco se verifica en este caso el requisito del nexo causal, entendiendo que, conforme sostiene el profesor don Arturo Alessandri Rodríguez, “hay relación de causalidad cuando el hecho o la omisión dolosa es la causa directa y necesaria del daño, cuando sin éste no se habría producido”, porque el sustento de los supuestos perjuicios sufridos por los actores, es lejano a la esfera del obrar de la demandada, teniendo su origen en la conducta de los padres actores, los que incluso pueden ser producto de patologías previas de los actores o de su hijo Maximiliano.

Sin que implique un reconocimiento de responsabilidad de su parte o de la existencia de daño o perjuicio, hace presente que, a su entender existe un notable exceso en la cuantía que el sentenciador ha fijado del monto de la indemnización pecuniaria, la que no se encuentra justificada ni acreditada, tampoco se condice con la relación de los hechos y los padecimientos que se alegan y que el recurrente estima ser inexistentes o producto patologías propias previas, amén de que emanan de la propia conducta de los padres, por lo que las pretensiones de los actores se fundan en meras alegaciones o conjeturas.

Discurre que el daño Moral, por las sumas fijadas en favor de la madre y los menores de edad, no resultó ser acreditado, menos aun cuando es la propia psicóloga Katherine Nova Leila quien en su concepto lo reconoce al señalar “que los niños en general las consecuencias, fueron las dificultad de adaptarse nuevamente a otro entorno educativo, debido a la dificultad que ellos tenían, para adaptarse fácilmente, les costaba mucho...” y que agrega: “el segundo daño que le hicieron a los 3 niños, al cancelarles la matrícula, debido que ellos llevaban 6 años en el colegio...”. por lo que, discurre, resulta incongruente fijar una indemnización para algunos de los menores de autos, como Amalia, quien a la época de la interposición de la demanda tenía sólo 5 años y a la de la cancelación de la



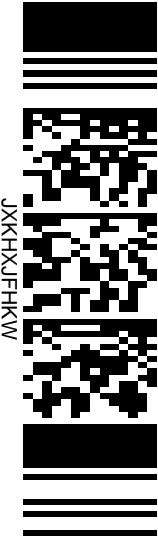
matricula sólo tenía 3 o 4 años y mal pudo tener las incertidumbres o pesares que el sentenciador da por establecidas, atendida la reconocida resiliencia de los menores como una cualidad identificada por los expertos. No obstante que, la aludida testigo es una psicóloga y no una profesional de la medicina quien pudo tener por establecidos cuadros depresivos de la progenitora y o del menor Maximiliano, único que señala haber atendido con psicoterapia. Tampoco pueden ser establecidos los daños morales a partir del testimonio de Giovanna Sofía Tarque Calle quien nunca dio fe del daño moral y aflicciones que el juez tiene por probado a partir de su testimonio, especialmente, porque la testigo jamás se explayó sobre las afecciones de los tres menores, narrando que los cuidaba esporádicamente y al ser interrogada al punto primero de prueba empleó un lenguaje hipotético “las consecuencias serían...”, sin utilizar ni referirse de manera precisa, categórica ni asertiva.

Sobre el mismo tópico, señala también, citando a los profesores Fernando Fueyo y Carmen Domínguez, que el daño moral debe ser probado y acreditado, criterio que ha sido mantenido por todo autor nacional que se ha referido al problema de la prueba en materia extracontractual, no bastando con sólo invocar que éste asciende a \$40.000.000.- para cada uno de los actores, tal y como a sumaalzada pretende la contraria, lo que no tiene paragón alguno.

Finalmente, y sobre este punto, señala ☐ que, en el evento improbable que se estimase que el daño moral era procedente, el Juez no lo fijó ponderando en justa y prudente medida, porque tal fijación importa el enriquecimiento injustificado de la contraria y sólo podría haber dado lugar a esta estimación si se hubiere probado que existió tal daño, lo que no aconteció en autos.

SEGUNDO: La demandada dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en estos autos, aduciendo un yerro que le causa agravio en el rechazo del sentenciador a las objeciones por falta de integridad y falta de autenticidad de su parte a los documentos que indica, acompañados por el actor, denunciando además que el Juez del grado rechazó equívocamente las alegaciones de falta de personería del abogado, falta de representación legal de los demandantes y de inadmisibilidad en la forma, en cuanto al régimen de responsabilidad por el que se demanda, deducidas todas por su parte en la contestación de la demanda.

En cuanto al fondo, cuestiona también el cumplimiento de los requisitos para configurar la responsabilidad de la demandada, así como la valoración de la prueba contenida en el fallo apelado, especialmente respecto de los informes acompañados por el actor y las declaraciones de sus deponentes y, sin que



aquello implique un reconocimiento de responsabilidad de su parte o de la existencia de daño o perjuicio, la fijación del monto de estos por el Juez.

TERCERO: Discurre primeramente la demandada que, el Juez equivocadamente rechazó las objeciones de falta de integridad y falta de autenticidad de los documentos que menciona, acompañados por la demandante, porque en el caso de la deponentes doña Katherine Nova Leila, si bien compareció a reconocer su firma puesta en el informe psicológico presentado por el actor, no reconoció íntegramente su contenido y respecto del Informe académico y social emitido por la profesora de Colegio Junior College, doña Graciela Salazar Martínez, esta no concurrió a estrados a ratificar el documento que emitió.

CUARTO: No obstante que, la recurrente hace consistir sus objeciones de falta de integridad y falta de autenticidad de los informes psicológicos que impugna, acompañados por la demandante, en un supuesto factico no previsto en la ley para tales objeciones, cual es, la falta de reconocimiento de quien lo emitió, consta de la declaración de doña Katherine Nova Leila, que repreguntada para que diga si es su firma la que aparece en los informes psicológico de doña Carla Velis Allende, Maximiliano Góngora Veliz y el certificado de atención psicológica de la familia Góngora Veliz, que fueron acompañados en parte de prueba el día 29 de octubre de 2019, y que se le exhibió en ese momento, señaló: “Es mi firma, yo hice esos informes después de haber trabajado en la psicoterapia con la familia”. Es decir, solo reconoció su firma puesta en los documentos acompañados como prueba de la demandante, si no que reafirmó haberlos confeccionado ella misma, razón por la que la objeción planteada debe ser desestimada.

QUINTO: Que, respecto del Informe académico y social emitido por la profesora de Colegio Junior College doña Graciela Salazar Martínez, igualmente objetado por la demandada por falta de integridad y falta de autenticidad, objeción que, según reclama debió ser acogida por el Juez del grado, deberá también ser rechazada desde que, sin perjuicio que no puede asumirse falta de integridad o falsedad del documento por la sola circunstancia de no ser ratificado en estrados por quien lo suscribió, como se pretende, la parte demandada no aportó prueba alguna que sustente sus legaciones a pesar que, de conformidad al principio general contenido en el artículo 1698 del Código Civil, se encuentra obligada a acreditarlas.

Si bien las objeciones documentales recién referidas se fundaron en causal legal para ello, se sustentaron en argumentos que difieren de ellas, dado que han apuntado más bien a su valor probatorio y no a la materialidad del instrumento producido, a las que se encuentran circunscritas, invadiendo con tal forma de



proposición labores propias y excluyentes del juez al dictar sentencia, como es la asignación de su valor probatorio.

SEXTO: Que, en lo referente a la falta de representación legal de los demandantes respecto de sus hijos y la falta de personería del letrado para comparecer en juicio respecto de los tres menores Góngora Veliz, invocadas por la apelante en el mismo escrito de contestación de la demanda, siendo entonces formuladas como alegaciones o defensas de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 305, resulta necesario discurrir si tales alegaciones planteadas en esa forma deben ser desestimadas, conforme disponen los artículos 85 y 86 a los que se remite esa preceptiva.

SEPTIMO: Que, respecto a la falta de representación legal de los demandantes para comparecer en el presente juicio, denunciada por la demandada, del tenor de los certificados de nacimiento de los tres menores acompañados en autos, no objetados se colige que ambos padres ejercen conjuntamente la patria potestad de sus tres hijos y, por consiguiente, ejercen conjuntamente su representación legal, desde que no aparecen en tales documentos sub inscripciones que den cuenta de modificaciones en el régimen de patria potestad, como dispone el inciso primero del artículo 244 del Código Civil, los que, conforme su inciso segundo, la ejercen entonces conjuntamente, debiendo los menores parecer en juicio como actores contra un tercero, representados por ambos padres, tal como dispone el artículo 264 del mismo Código, lo que resulta ser coincidente con el tenor del libelo de la demanda en que comparece el letrado don Mauricio Alejandro Ortiz Meier quien dice accionar por don Eduardo César Góngora González y por doña Carla Andrea Véliz Allende, refiriendo allí que lo hace en representación de ambos padres quienes actúan por sí y en representación de sus hijos menores de edad: Amalia Trinidad, de 5 años de edad, Maximiliano Andrés, de 7 años de edad y Sebastián Vicente, de 9 años de edad. En consecuencia encontrándose acreditada la representación legal de los padres respecto de sus 3 hijos, la alegación de la demandada será rechazada.

OCTAVO: Que, en cuanto a la falta de personería del letrado para comparecer en juicio en representación de los menores de autos, alegando la demandada que este carecería de esa facultad desde que el mandato judicial conferido por ambos padres lo faculta para actuar sólo en su representación y no de sus hijos, resulta útil examinar el tenor de la escritura pública que lo contiene y en que se sustenta el poder del actor. Consta allí textualmente que le fue otorgado al abogado para que “represente a los mandantes en forma conjunta y/o separadamente en todos los juicios y actos judiciales no contenciosos, en que el compareciente tenga interés actualmente o lo tuviera en lo sucesivo, ante



cualquier tribunal de orden judicial, de compromiso o administrativo de la Republica y en juicio de cualquier naturaleza, así intervengan los mandantes como demandantes, denunciante, querellantes, demandados terceristas, coadyuvantes o excluyentes o a cualquier otro título, o en cualquiera otra forma, pudiendo celebrar toda clase de avenimientos y transacciones judiciales o extrajudiciales”. Agregando que comprende especialmente todas las facultades indicadas en ambos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil.

NOVENO: Que del tenor de la escritura pública transcrita precedentemente, en lo que interesa, especialmente en aquella parte en que se consiga que sus mandantes habilitan al abogado que interpone la demanda de autos para actuar en juicio en su representación, interviniendo a más de todas las calidades que allí se enuncian, “a cualquier otro título y de cualquier otra forma”, se desprende prístinamente que el referido mandato le fue conferido en términos tan amplios que permiten sustentar válidamente en él la comparecencia de sus mandantes en calidad de representantes legales de sus tres hijos impúberes, como entendió también el tribunal ad quo al proveer el tercer otrosí de la demanda, razón por la cual, tal alegación será desestimada.

DECIMO: Que, respecto de la denuncia de la recurrente de inadmisibilidad en la forma porque la demandante no habría determinado con precisión en su libelo cual es el régimen de responsabilidad civil en que se asiló la demandada, considerando que aludió a normas de la responsabilidad contractual y extracontractual, sosteniendo el apelante la existencia de un equívoco en el fallo, desde que, por las razones que expone, el juez no pudo pronunciarse por uno u otro régimen de responsabilidad civil como lo hizo sin incurrir en el vicio de ultra petita y por la inadmisibilidad del cumulo de responsabilidades, lo cierto es que, de la atenta lectura de la demanda, y más allá de lo declarado por el Juez en el considerando duodécimo en cuanto a su generalidad, resulta evidente que la actora accionó demandando la responsabilidad civil contractual del Colegio San Jorge desde que, según señala textualmente: “En el presente caso existe una responsabilidad civil derivada de un contrato de servicios educacionales al que se le puso término de forma unilateral por parte de la demandada, la que al no renovarlo para el periodo 2017, cometió un acto arbitrario que ha conculcado el derecho constitucional de igualdad ante la ley, vulnerando los derechos de mis representados. Tal como lo estableció nuestra Corte de Apelaciones de Arica”. Por consiguiente, el ámbito de responsabilidad civil por la que el actor demanda, no cabe duda que es el de la responsabilidad contractual.

Es cierto que el actor cita luego en su libelo el artículo 2.329 del Código Civil, reproduciendo el inciso primero de esa preceptiva. Sin embargo, tanto al



contestar el traslado conferido por el juez por las excepciones dilatorias opuestas por la demandada, las que por cierto fueron rechazadas, así como al evacuar su réplica explicó que: “en el concepto de responsabilidad contractual se comprende no solamente la indemnización de los perjuicios materiales derivados del incumplimiento, sino también la de los daños extra patrimoniales o morales experimentados por el acreedor”, por lo que esa alusión a la responsabilidad extracontractual se justifica, ya que pretende la compensación por el daño moral ocasionado a sus representados por la demandada, aludiendo como fundamento, a la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que lo ha reconocido en materia de responsabilidad contractual, tal como según estima se verifica en la especie. Razón por la que la pretensión de la demandada no puede prosperar, pues al quedar determinado el ámbito normativo de responsabilidad por el cual se demandó y la petición de la compensación de los perjuicios por el daño moral, la sentencia no admitió ni el cumulo de responsabilidades ni menos está viciada de ultra petita.

Es más, en la instancia fue la demandada quien introdujo la hipótesis del cúmulo de responsabilidad, el actor nada dijo al efecto.

En este escenario, entonces, inconcusa la improcedencia del vicio de ultra petita sugerido por la recurrente.

UNDECIMO: Denuncia también el apelante, ahora en cuanto al fondo de la cuestión debatida, la falta de requisitos para configurar la responsabilidad civil de su parte, la que considera inexistente y la valoración de la prueba efectuada por el Juez en la sentencia apelada.

Sostiene que carece de culpa porque, si bien decidió no renovar la matrícula a los hijos de la demandante para el periodo siguiente por su disposición negativa y falta de compromiso para superar los problemas conductuales del menor Maximiliano Góngora, reconsideró tal decisión. Quedando de manifiesto en el informe evacuado por orden de esta Corte en los autos Rol. 797-2016, antes de dictar sentencia y, sin embargo, señaló, los actores no cumplieron con el proceso de matrícula previo, concurriendo a la producción del daño a sus hijos, al matricularlos en un colegio distinto, no constando tampoco que uno de ellos hubiere desarrollado patologías a consecuencia del video que vio junto al resto de sus compañeros, agregando que, su conducta en el colegio Junior College, actual establecimiento educacional donde fueron matriculados, no está exenta de los mismos reparos, por lo que habría también ausencia de lesión o daño que si lo hubiere, por la misma razón, no resulta imputable a su parte. Sosteniendo además en ese mismo capítulo del recurso, que tampoco se verifica en este caso el requisito del nexo causal, porque el sustento de los supuestos perjuicios



sufridos por los actores no es imputable a su obrar, teniendo su origen en la conducta de los padres, pudiendo incluso estar afectos a patologías previas ellos y sus hijos especialmente Maximiliano.

DUODECIMO: Que, en cuanto a la denuncia por la supuesta ausencia de los requisitos para configurar la responsabilidad civil de la demandada, de los antecedentes que obran en autos es posible advertir que se configuran en la especie todos y cada uno de ellos. Así el incumplimiento del cual la demandada pretende exonerarse, consiste en que es ella la que unilateralmente puso término al contrato de servicios educacionales de los menores Góngora Veliz cuya existencia no controvertió, por el contrario, fue expresamente admitida y como señaló esta Corte en la sentencia recaída en los autos Rol 797-2016 y se consignó en la Resolución exenta N°2017/PA/15/082, de la Superintendencia de Educación, ambos documentos acompañados al presente juicio, no objetados, la decisión de no renovar la matrícula de los tres hijos de los demandantes, fue un acto arbitrario e ilegal que los dejó sin la posibilidad de continuar con sus estudios durante el año 2017 en el Colegio demandado.

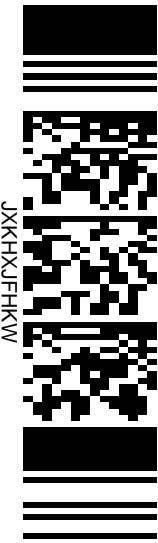
Dicho acto, como aparece en los referidos documentos, incumplió las disposiciones del reglamento de convivencia escolar que regula las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar y constituyó, respecto de los tres menores y su apoderada, un acto arbitrario de discriminación ilegal que conculcó el derecho constitucional de igualdad ante la ley establecido en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, desde que la aludida decisión unilateral de la demandada, tal como discurre el Juez en los considerandos Decimosexto y Decimoséptimo del fallo en alzada, no se ajustó a un justo y racional procedimiento, atendido el contenido mínimo del contrato de servicios educacionales a la luz de las disposiciones de la Ley General de Educación, especialmente las contempladas en su artículo 10, configurándose así una flagrante inobservancia al derecho de los niños, alumnos del colegio demandado, a no ser discriminados arbitrariamente y, por tanto, un incumplimiento de parte de la demandada de una obligación esencial del contrato de prestación de servicios educacionales que, conforme a los aludidos antecedentes del proceso y, a falta de prueba en contrario, se presume culpable y que, tratándose además, del incumplimiento de una obligación de no hacer y que lo hecho por el contratante incumplidor, en cuanto acto de discriminación, no puede deshacerse conforme dispone el artículo 1.555 del código Civil, se encuentra en mora según el artículo 1.557 del mismo Código. Resultando procedente entonces la indemnización demandada, sin perjuicio de los descargos de la parte accionada en cuanto a su disposición de reconsiderar la medida y que



los apoderados de los menores, no cumplieron con el proceso de matrícula como ordenó esta Corte, por cuanto, por una parte, ambas alegaciones se refieren a situaciones posteriores al incumplimiento o al acto de discriminación y no lo revierten ni borran sus efectos, tal como lo previene el inciso primero del citado artículo 1555 y, por otra, no cabe duda que la decisión de la demandada de recapacitar fue motivada y a propósito de las acciones jurisdiccionales y administrativas incoadas por los afectados y adoptada tardíamente y condicionada, como se desprende del informe evacuado por el director del colegio demandado don Omar Sagredo y la carta dirigida por el mismo a la madre apoderada de los menores, obligándola entonces a incorporar a sus hijos a otro establecimiento escolar, por el temor de no encontrar matrícula.

DECIMO TERCERO: Que, en cuanto a la ausencia de lesión o daño alegada por la demandada, aun cuando el Juez del grado desestimó la totalidad de los perjuicios demandados por el padre, por no ser parte del contrato de prestación de servicios educacionales, desechando también aquellos materiales reclamados por la madre, por no existir detalle de ellos en la demanda, ni prueba pertinente de su existencia y, en el caso de la imposibilidad de trabajar, por no acreditarse tal circunstancia, ni la existencia de un trabajo previo abandonado por esa demandante, de la prueba rendida en autos resultó acreditada la existencia del daño moral de doña Carla Andrea Veliz Allende y de sus tres hijos menores, como consta especialmente en los informes emitidos por la psicóloga doña Katherine Nova Leila, en su declaración como deponente de la parte demandante y por el testimonio de doña Giovanna Sofía Tarque Calle.

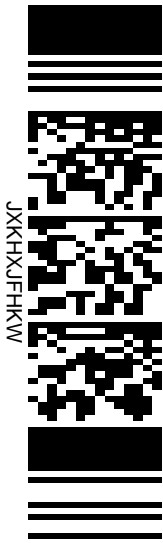
DECIMO CUARTO: Así, la testigo Novoa Leila señaló que le constan los hechos respecto de los cuales depuso y que consignó en su informe psicológico ya que trató a los demandantes desde el año 2016, primero al menor Maximiliano cuando incluso su profesora del Colegio San Jorge demandado, la tía Ángela Ramírez, la recomendó a su madre por haber tratado a su propio hijo, elaborando el informe psicológico del menor acompañado en autos, donde describió los daños sufridos como consecuencia de la exposición al video. Agregando que, mientras hacia el seguimiento del caso, en el año 2017, doña Carla le comentó de la resolución de esta Corte en virtud de la cual los niños debían ser incorporados al colegio y que la demandada no acató al imponer condiciones en un documento que la madre según se exigía debía firmar para recién evaluar si reincorporaban a los niños, empeorando su situación y la de Maximiliano, por lo que continuó con su tratamiento y terapias psicológicas durante su permanencia en el colegio Junior College.



Señala que pudo distinguir a lo menos 3 tipos de daño de los demandantes. Uno inferido al menor Maximiliano Góngora al exponerlo a un video de alta carga trágica y que contiene un fuerte contenido emocional para un niño de esa edad, desarrollando stress post-traumático, dependencia materna, inseguridad, paranoia porque el niño pensaba que se podía morir o cualquiera de su familia en cualquier momento, sentimiento de peligro para su integridad, retroceso en sus conductas, por ejemplo, dejando de dormir solo, teniendo pesadillas constantemente, y mucho temor. Identifica un segundo daño que afectó a los 3 niños, al cancelarles la matrícula, debido a que llevaban 6 años en el colegio demandado y habían generado arraigo. Las consecuencias fueron la dificultad de adaptarse nuevamente a otro entorno educativo al verse obligados a cambiar de colegio, proceso que, declara, les costó mucho, especialmente al menor Sebastián Góngora que tiene rasgos de Asperger, lo que dificultó más su adaptación, y a Maximiliano que, además se sentía culpable, pensando que el cambio de colegio, suyo y de sus hermanos era su responsabilidad. Dice que el último perjuicio es el inferido a los padres, debido a tener que cambiar a los niños de forma abrupta de establecimiento educacional, desestabilizando sus rutinas, aunado al sentimiento de injusticia y de impunidad de ver a sus hijos sufriendo, lo que gatillo problemas emocionales, cansancio y el agotamiento mental y emocional que implicó todo el proceso judicial. Sobre todo en la madre que experimento un cuadro depresivo, exceso de angustia, desmotivación laboral, en las cosas de la casa y sus labores como madre.

DECIMO QUINTO: A su turno la deponente doña Sofía Tarque Callé refirió que el daño ocasionado por las acciones del colegio lo podemos dividir en tres partes. Primero el daño causado a Maximiliano por la exhibición de un video no apto para su edad. Segundo, el daño causado a los menores, Sebastián, Maximiliano y Amalia, al no permitirle, la renovación de matrícula en el colegio. El tercer daño es el ocasionado a los padres. Agrega que las consecuencias para el menor Maximiliano, fueron crisis de pánico, no podía comer tranquilamente, pensaba que la comida le iba a ocasionar la muerte y que sus hermanitos también se iban a morir. Y la consecuencia a sus hermanos sería que iban a perder el afecto con los compañeros del colegio, ya que estaban aproximadamente 6 años en el colegio, agrega que la señora Carla Veliz estaba muy afectada con crisis de pánico, angustia, teniendo que acudir a un profesional para poder recuperarse de la situación ocurrida hacia sus hijos.

DECIMO SEXTO: Que, en cuanto al nexo causal presuntamente inexistente reclamado por la demandada, este sin duda ha quedado establecido, porque las aflicciones acreditadas como un hecho de la causa, son consecuencia directa e



inmediata del actuar de la demandada, primero al exponer a un niño de 5 años a un video con claro contenido emocional y trágico, que, tal como se colige de los medios de prueba acompañados en autos, le ocasionó un severo trauma y, luego al expulsar a los tres menores Góngora Veliz a los que, unilateralmente y sin mediar un procedimiento justo y racional en que sus padres pudiesen controvertir tal decisión, no renovó, sin más su matrícula para el año lectivo 2017.

DECIMO SEPTIMO: Que, los antecedentes de autos a juicio de esta Corte, revisten los caracteres de gravedad y precisión para constituir prueba suficiente, en cuanto a que doña Carla Veliz Allende y sus tres hijos sufrieron daños de naturaleza psicológica, debido al actuar de la demandada y, en el caso particular de la menor Amalia Trinidad, si bien al tiempo del acaecimiento de los hechos que motivaron el presente juicio, contaba con 4 años de edad y, sin perjuicio de la capacidad de resiliencia que pueda presumirse en los niños de corta edad, resulta incuestionable que la afectación psicológica de sus hermanos, su madre y en definitiva de su grupo familiar, ocasionada por ese actuar, provoco en ella la dificultad de adaptación y el stress de que da cuenta el certificado de atención psicológica acompañado en el folio 46 de estos autos, que refiere la entrevista psicológica efectuada a la menor.

DECIMO OCTAVO: Que, en cuanto al monto de la compensación determinada en el fallo apelado que la demandada también cuestionó, de 3 millones para cada uno de los menores Amalia Trinidad, Maximiliano Andrés, y Sebastián Vicente, apellidados todos Góngora Velis y de 2 millones para su madre doña Carla Andrea Veliz Allende, si bien la doctrina y la jurisprudencia han concluido que no es posible resarcir la angustia, la pena, el dolor o la aflicción espiritual o moral, afectaciones que se han subsumido en el concepto de daño moral, porque este carece de materialidad, en caso de encontrarse acreditado como ocurre en la especie, debe ser compensado, otorgando un valor de satisfacción de reemplazo, determinando el Juez prudencialmente su monto estimando esta Corte suficiente el quantum fijado en la sentencia recaída en estos autos.

Por las anteriores consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 170, 303, 305 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 1.437, 1.444, 1.445, 1.448, 1.489, 1545, 1,546, 1.555, 1.557 y 1.698 y siguientes del Código Civil, se declara:

Que, **SE CONFIRMA** la sentencia de doce de mayo de dos mil veinte, pronunciada en la causa Rol C-695-2018 del Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad.



Que, no se condena en costa a la demandada a las costas del recurso por estimar esta Corte que ha tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y comuníquese por la vía que corresponda.

Redactada por el abogado integrante don Ricardo Oñate Vera.

No firma la Ministra señora Claudia Arenas González, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Rol N°343-2020 Civil





JKHXJFHKW

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministro Marco Antonio Flores L. y Abogado Integrante Ricardo Fernando Oñate V. Arica, veintinueve de enero de dos mil veintiuno.

En Arica, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

